



5 de octubre de 2017

Núm. 3

ACT 50/7111/2017



Hideko e Iwao Hakamada en su casa en Japón. © Amnesty International Japan

Las acciones de campaña sobre casos emblemáticos han sido uno de los factores que han impulsado el cambio en la región de Asia y Oceanía. La excarcelación temporal, en espera de juicio, del emblemático preso [Iwao Hakamada](#) —que pasó más de 45 años en espera de ejecución— en marzo de 2014 da fe de los incansables esfuerzos de su hermana Hideko y de simpatizantes en Japón y en todo el mundo. Su liberación ha puesto de manifiesto los efectos adversos del secretismo en la salud mental de las personas condenadas a muerte en Japón, así como la urgente necesidad de mejorar las salvaguardias en las investigaciones penales.

En China, sólo dos meses después de su liberación, el Tribunal Supremo Popular anuló la condena a muerte impuesta a [Li Yan](#), que había sido declarada culpable de matar a su esposo después de sufrir durante meses abusos en el ámbito familiar. Su caso generó una gran atención, ya que antes del asesinato había contactado con las autoridades en varias ocasiones para solicitar protección, pero no se tomó medida alguna. Tras la anulación de su condena a muerte, las autoridades emitieron en marzo de 2015 nuevas directrices sobre la imposición de penas en los casos que afectan a víctimas de violencia en el ámbito familiar que cometan delitos contra la persona que las maltrata.

Otro caso emblemático es el de [Yong Vui Kong](#), joven ciudadano de Malasia que fue declarado culpable y condenado a la pena de muerte preceptiva en Singapur por tráfico de una pequeña cantidad de heroína, mientras que los cargos presentados en su contra su jefe singapurés se retiraron. Más tarde se introdujeron enmiendas legislativas que permiten que los jueces impongan condenas con arreglo a su criterio en circunstancias limitadas.

Las acciones de campaña contra la pena de muerte también han servido para impedir retrocesos en la región, como en fechas recientes en [Filipinas](#) (véase *infra*) y contra la reanudación de las ejecuciones en [Maldivas](#) después de más de 60 años.

ACTÚA El presidente de Maldivas ha anunciado que el gobierno reanudará las ejecuciones en el país. Ayúdanos a pedirle que mantenga el historial positivo del país en lo relativo a la pena de muerte: **Error!**
Hyperlink reference not valid. <https://www.amnesty.org.uk/actions/urgent-stop-executions-maldives>

REFLEXIONES SOBRE LA ABOLICIÓN

El 11 de diciembre de 1977, Amnistía Internacional y los demás participantes en la Conferencia de Estocolmo sobre la Abolición de la Pena de Muerte emitieron la [Declaración de Estocolmo](#) —primer manifiesto abolicionista internacional—, en la que instaban a todos los gobiernos a abolir de inmediato y por completo la pena de muerte.

En aquel entonces, sólo 16 países habían abolido la pena de muerte. Ahora que han pasado 40 años, la cifra ha ascendido a 105. Que no tengan que pasar otros 40 años para que la pena de muerte pase a la historia.

ASIA Y OCEANÍA

En 1977, todos los países de la región de Asia y Oceanía mantenían la pena de muerte, aunque hacía tiempo que Australia, Bután, Brunéi Darussalam, Fiyyi, Maldivas, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea habían dejado de llevar a cabo ejecuciones. Sri Lanka realizó su última ejecución poco después, en 1978.

El panorama regional es muy diferente ahora. Oceanía es prácticamente una zona sin pena de muerte, siendo Nauru y Fiyyi los últimos Estados que han abolido esta pena. Papúa Nueva Guinea y Tonga mantienen todavía la pena de muerte en su legislación, pero sólo Papúa Nueva Guinea ha impuesto condenas a muerte. Fuera de Oceanía, ocho Estados han abolido por completo la pena de muerte, mientras que otros ocho son abolicionistas en la práctica. Mientras tanto, Tailandia cumplirá 10 años sin ejecuciones en 2019.

Ahora bien, Asia y Oceanía siguen albergando a casi la mitad de los países en los que Amnistía Internacional informó de ejecuciones en 2016, entre ellos China, que se cree que ejecuta y condena a muerte a miles to personas cada año. Pero incluso en estos países, en los últimos decenios se ha observado una considerable reducción del recurso a la pena de muerte. Por ejemplo, revelaciones ocasionales de carácter semioficial publicadas en medios de comunicación estatales de China señalan una drástica disminución del número anual de ejecuciones en los últimos 10 años, que al parecer ha pasado de más de 10.000 a una “cifra de cuatro dígitos”. En Singapur, las ejecuciones han descendido desde un máximo de 70 al año a mediados de la década de 1990 a unas cuantas. Aunque es difícil determinar los motivos de la disminución del número de ejecuciones en la región, es probable que la presión internacional y el cambio progresivo en el discurso público sobre la pena de muerte —que deja de percibirse como una cuestión de justicia penal para ser un asunto centrado en el marco de los derechos humanos— sean factores decisivos para explicar esta evolución.

En los últimos años se han registrado también retrocesos negativos, como la reanudación de las ejecuciones por parte de los gobiernos con el pretexto de hacer frente a la delincuencia y el terrorismo, pese a la falta de pruebas de su eficacia para tal fin. India reanudó las ejecuciones en 2012 para actos relacionados con el terrorismo, tras un paréntesis de ocho años, y un año después Indonesia hizo lo propio para delitos relacionados con las drogas, después de cuatro años. Pakistán anuló la suspensión de las ejecuciones de civiles, que estuvo en vigor seis años, tras el ataque contra una escuela en diciembre de 2014.

Allí donde su uso continúa, la pena de muerte en la región plantea a menudo motivos de preocupación relacionados con juicios injustos y sentencias condenatorias basadas en declaraciones obtenidas mediante coacción, además de otras violaciones de las salvaguardias internacionales. Las autoridades de varios países de la región no hacen públicos los datos relativos a su recurso a esta pena, lo que impide un debate informado sobre su mantenimiento y oculta activamente información sobre las ejecuciones, antes o después de que éstas se lleven a cabo.

Pero cuando los tribunales rechazan un número cada vez mayor de declaraciones de culpabilidad poco sólidas y se exonera a personas del corredor de la muerte —por ejemplo, el pasado año en Bangladesh, China, Taiwán y Vietnam—, gana terreno una nueva conciencia de las deficiencias de la pena de muerte y de la inevitabilidad de su

relegación a los libros de historia.

ENFOQUE CAMPAÑA CONTRA LA PENA DE MUERTE EN FILIPINAS

Wilnor Papa es responsable de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Filipinas. Comenzó a trabajar contra la pena de muerte en 1995 como miembro del Grupo de la Universidad de Filipinas-Diliman de Amnistía Internacional. Más tarde se incorporó a la Sección, donde ha coordinado el trabajo de campaña sobre varios asuntos, entre ellos la abolición de la pena de muerte. Hablamos con Wilnor de las actividades de campaña de la Sección contra el proyecto de legislación que reinstauraría esta pena en Filipinas.

Hace algo menos de un año parecía que la pena de muerte iba a ser introducida de nuevo en Filipinas. Pero ahora el Senado no concede prioridad a la consideración de proyectos de ley sobre este asunto. ¿Cómo hemos llegado a este punto?

El gobierno de Duterte prometió reinstaurar la pena de muerte antes de octubre de 2016, una promesa que recibió un sonoro aplauso en la tribuna durante el discurso de toma de posesión del presidente en el Congreso. Aunque la Cámara de Representantes adoptó las medidas propuestas para reinstaurar la pena capital en marzo de 2017, las acciones nacionales e internacionales para bloquearlas no fueron en vano.



En primer lugar, nuestra resistencia ha dado lugar a un importante debate sobre la pena de muerte en el país que impide que este gobierno consiga fácilmente lo que desee. Es indudable que los esfuerzos coordinados —de la sociedad civil y de actores clave en Filipinas y en otros países, como la iglesia católica— nos permitieron ganar un tiempo decisivo, sobre todo al final del año pasado, antes de que se examinaran los proyectos de ley. Esto a su vez nos dio la libertad de acción necesaria para preparar mejores argumentos en relación con los efectos de la pena de muerte, incluso sobre la situación económica y política de Filipinas en la escena mundial. En consecuencia, en Amnistía Internacional —gracias a los esfuerzos coordinados de la Sección Filipina, el Secretariado Internacional y otras Secciones y Estructuras de todo el mundo— pudimos implementar mejores estrategias de trabajo de incidencia, conseguir información en tiempo real, transmitir mejor los mensajes a legisladores seleccionados y movilizar acciones adecuadas y efectivas.

Aunque la propuesta de reintroducir la pena de muerte fue adoptada con un apoyo abrumador en la Cámara de Representantes, su recepción en el Senado filipino no fue tan entusiasta. El contacto directo mediante reuniones personales, las cartas y los correos electrónicos a senadores clave mostrar nuestro apoyo a sus esfuerzos para oponerse a la pena de muerte, o para rebatir su postura de apoyo a la pena de muerte, han resultado eficaces para garantizar que esta cámara legislativa se toma su tiempo. Lo cual es un buen resultado, si bien se mira. Algunos senadores también nos han implorado que digamos a los miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional de todo el mundo que dejen de enviar cartas a sus oficinas, pues han decidido ya que votarán contra la pena de muerte.

Participaste en una gran campaña contra la pena de muerte en Filipinas ya en 2006, cuando fue abolida por última vez. ¿Han cambiado mucho los argumentos, según tu experiencia? ¿Cuál era el contexto cuando el actual presidente habló por primera vez de reintroducir la pena de muerte en Filipinas?

Aunque los argumentos *contra* la pena capital han mejorado en el último decenio —pruebas estadísticas basadas en la investigación durante decenios de sus efectos no disuasorios y la lista cada vez mayor de instrumentos internacionales que consideran obsoleta la pena capital, por no citar más que algunos aspectos—, los argumentos *a favor de su reintroducción* que se usaron en el Congreso y en la esfera pública no han evolucionado realmente. El apoyo público a la pena de muerte no ha variado a lo largo de los años, ni siquiera durante su abolición en 2006, y se basa en gran medida en equiparar los elementos de castigo merecido al logro de la justicia. Estos argumentos apelan sobre todo a la indignación de la opinión pública contra los autores de los llamados crímenes "horrendos", con especial atención a los cometidos por personas que supuestamente estaban bajo la influencia de drogas prohibidas.

En el periodo previo a su abolición en 2006, las fuerzas que se oponían a la pena de muerte estaban más organizadas y eran más activas, cada vez que se abordaba la pena de muerte, ya fuera en los medios de comunicación, en las movilizaciones en la calle o en entornos académicos. Aunque puede decirse lo mismo de la situación actual, lo que en esta ocasión es diferente es la maquinaria de propaganda, bien dotada de recursos, del gobierno de Duterte dentro del Congreso, en los medios de comunicación, los medios sociales y sus actividades en las comunidades. Aunque la pena de muerte fue reintroducida en la época del presidente Ramos, utilizada en la época del presidente Estrada y durante los primeros años de la presidenta Arroyo, en realidad ninguno de estos gobiernos anteriores promovió activamente las ejecuciones en público como medio o recurso para hacer justicia.

¿Cómo el trabajo por los derechos humanos en Filipinas en este momento? ¿Están preocupados los defensores y defensoras de los derechos humanos, y tú personalmente?

El contexto actual en Filipinas es en efecto bastante difícil. La oleada de homicidios ilegítimos, como consecuencia de las mortíferas políticas contra las drogas del gobierno, podría haber llegado a superar la cifra de 12.000 víctimas, poco más de un año después del acceso de Duterte a la presidencia. Estos homicidios no sólo carecen de precedentes, sino que han afectado seriamente a nuestro trabajo de derechos humanos y al espíritu de la población filipina en general. El apoyo que la opinión pública sigue concediendo al presidente ha permitido que el Estado continúe con los homicidios sin cesar y sin rendir cuentas.

En diferentes ocasiones, el presidente ha jurado que quienes se opongan a su guerra contra las drogas, en particular los defensores y defensoras de los derechos humanos, serán recolectados junto con los delincuentes, decapitados o acusados formalmente de conspiración. Aunque no se tiene noticia de ningún caso de activistas o defensores y defensoras que hayan sido víctimas hasta ahora, estas amenazas pueden envalentonar no obstante a los agentes del Estado o sus partidarios para cumplir su promesa, como ha ocurrido en los ataques contra presuntos autores de delitos relacionados con las drogas.

Para concluir, ¿alguna reflexión que desees compartir con las y los activistas de Amnistía Internacional?

Continúen haciendo campaña para impedir la aprobación de la pena de muerte en Filipinas y para que el gobierno tome las medidas necesarias para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales en el país. Aunque en ocasiones la situación actual parece sombría, no debemos dejar que nos desanime, sino que debemos trabajar con más denuedo para garantizar que los derechos humanos, ahora atacados en varias partes del mundo, se reconocen, respetan, protegen y realizan en el país. No hay otro modo. No hay otro recurso.